

RESUMEN DE:
ATAQUES
A LA EDUCACIÓN
2014



Global Coalition to **Protect** **Education from Attack**

El presente estudio es una publicación de la **Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA)**, una coalición creada en 2010 por distintas organizaciones dedicadas a la educación en contextos de emergencia y en estados afectados por conflictos, educación superior, protección, normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, como respuesta ante los persistentes ataques contra instituciones educativas, sus estudiantes y personal en países afectados por conflictos e inseguridad.

GCPEA es una coalición de organizaciones conformada por Council for Assisting Refugee Academics (CARA), Human Rights Watch, Institute of International Education, Protect Education in Insecurity and Conflict (PEIC, un programa de Education Above All), Save the Children, Scholars at Risk Network, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). GCPEA es un proyecto de Tides Center, una organización sin fines de lucro constituida en virtud del apartado 501(c)(3).

El presente estudio se elaboró a partir de investigaciones independientes que fueron encargadas en forma externa por GCPEA. Se llevó a cabo con independencia de las organizaciones miembros del Comité Directivo de GCPEA y no refleja necesariamente la opinión de las organizaciones que integran dicho Comité.

COLABORADORES

Líder de equipo del proyecto/Editor general: Mark Richmond

Investigador principal: Brendan O'Malley

Investigadora/Coordinadora de producción: Jane Kalista

Investigadores que colaboraron: Sibylla Brodzinsky, Steve Farrar, John Giraldo, Whitney Hough, Aimé Kouman, Dorothy Lepkowska, Anji Manivannan, Clemence Manyukwe, Chiade O'Shea, Fuad Rajeh, Paul Rigg y Paulina Vega.

Autores de ensayos temáticos: Steven Haines, Mario Novelli, Ervjola Selenica y Hannah Thompson.

GCPEA desea agradecer a Julia Freedson, Vernor Muñoz y Peter Rowe, miembros del Comité Asesor del proyecto, por revisar el contenido del estudio y aportar comentarios.

GCPEA agradece a Veronique Aubert, Zama Coursen-Neff, Emily Echessa, Courtney Erwin, Amy Kapit, Elin Martinez, Jim Miller III, Diya Nijhowne, Robert Quinn, Bede Sheppard, Margaret Sinclair, Stephen Wordsworth y Wendy Zillich por haber revisado y comentado este estudio, así como también a Brian Root, que aportó su experiencia en aplicación de análisis de datos a investigaciones sobre derechos humanos para examinar la metodología del estudio.

Asimismo, queremos destacar los aportes de Sumerya Aydemir, Carlos Conde, Mary De Sousa, Corinne Dufka, Lama Fakih, Ali Dayan Hasan, Selah Hennessy, Rafael Jiménez, Dewa Mavhinga, Fuadi Pisuwan, Anne Reckless, Phil Robertson, Charles von Rosenberg, Matt Wells y Belkis Wille.

Agradecemos también a PEIC y a dos donantes anónimos por haber aportado los fondos para llevar a cabo este estudio.

(Tapa) Niños caminan entre los escombros de la escuela primaria Tarik Al Bab, que debió cerrar y resultó dañada por los combates en Alepo, Siria, 9 de febrero de 2013.

© 2013 Jerome Sessini/Magnum Photos

ATAQUES A LA EDUCACIÓN 2014

Un estudio global sobre amenazas o uso deliberado de la fuerza contra estudiantes, docentes, académicos, miembros de sindicatos de educación y funcionarios gubernamentales, trabajadores del sector humanitario y otros miembros del personal educativo, así como contra escuelas, universidades y otras instituciones educativas, perpetrados por motivos políticos, militares, ideológicos, sectarios, étnicos o religiosos durante el período 2009-2013

PREFACIO

Era el 9 de octubre de 2012. El autobús escolar, un camión adaptado para cumplir esa función, había avanzado apenas unas cuadras desde la escuela Khushal en Mingora, en el noroeste de Pakistán, cuando un hombre con el rostro cubierto se interpuso delante del vehículo. Un segundo agresor, armado con una pistola, trepó por la parte trasera del vehículo, se inclinó hacia adentro y preguntó cuál de las 20 alumnas que viajaban en el transporte era Malala. Cuando el conductor aceleró, el hombre armado abrió fuego, y Malala recibió un disparo en la cabeza.

Malala Yousafzai, de 15 años, había cobrado notoriedad en la zona —y se había convertido en un objetivo para la rama pakistaní de los talibanes— tras atreverse a alzar su voz contra el edicto de las milicias que prohibía que las niñas asistieran a la escuela y contra los atentados con explosivos perpetrados por estos grupos en escuelas. En estado crítico debido a una bala que le atravesó la cabeza y un hombro y quedó alojada cerca de la columna vertebral, fue llevada de urgencia en helicóptero a un hospital militar en Peshawar, junto con otras dos compañeras que también resultaron heridas. Desde allí, fue trasladada a Inglaterra, donde reside actualmente después de atravesar una recuperación asombrosa.

Aclamada por los medios internacionales y elogiada por organizaciones de derechos humanos que destacan su valentía, Malala ha alcanzado fama en todo el mundo. Sin embargo, es tan solo una entre miles de estudiantes, docentes, académicos y otros miembros del personal educativo que, en decenas de países, son perseguidos con métodos violentos.

Este estudio de alcance global expone la magnitud y la naturaleza de los ataques contra la educación; hace hincapié en el impacto que tienen sobre la educación al afectar a estudiantes, docentes y establecimientos; y documenta los mecanismos implementados por gobiernos, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y órganos de la ONU para reducir el impacto de este tipo de violencia y evitar nuevos ataques en el futuro.

Para ello, ofrece el corpus de documentación más completo sobre ataques contra la educación que se haya conformado hasta la fecha. A partir de estudios anteriores publicados por la UNESCO en 2007 y 2010, no solo examina los ataques contra escuelas, que fueron abordados previamente por otras investigaciones, sino que además toma en cuenta el uso militar de predios educativos y analiza con mayor detenimiento los ataques contra la educación superior. Los cuatro objetivos principales del estudio son: contribuir de manera más efectiva a las iniciativas internacionales y nacionales destinadas a prevenir que escuelas, universidades, estudiantes, docentes, académicos y otros miembros del personal educativo sean objeto de ataques; fomentar la investigación, el juzgamiento y la sanción de quienes cometan ataques; difundir conocimientos vinculados con respuestas que hayan resultado efectivas; y ayudar a quienes han sido atacados a recuperarse y reconstruir sus vidas —como lo está haciendo Malala— formulando recomendaciones de acciones propuestas que deberían ser adoptadas e implementadas por la comunidad internacional, los gobiernos y los grupos armados no pertenecientes al Estado.

En julio de 2013, Malala habló frente a la Asamblea General de la ONU y subrayó la importancia de proteger a la educación. “Los terroristas creyeron que lograrían cambiar mis objetivos y frenar mis aspiraciones”, manifestó, “pero nada ha cambiado en mi vida, excepto que ahora ya no siento debilidad, temor ni desánimo. Tomemos nuestros libros y lápices. Son nuestra arma más poderosa”.

En una escuela en Lahore, Pakistán, un grupo de personas lleva velas e imágenes de Malala Yousafzai, una estudiante paquistaní que fue víctima de un atentado con armas perpetrado por talibanes, como represalia por haber criticado a milicias talibanes y defendido la educación de las niñas, 12 de octubre de 2012.

© 2012 REUTERS/Mohsin Raza



Las principales secciones de Ataques a la Educación 2014 son:

- un resumen ejecutivo donde se presenta una breve exposición de las principales cuestiones y recomendaciones;
- una sección sobre metodología donde se describen los métodos utilizados para la investigación y los principales obstáculos identificados;
- un análisis global donde se ofrece una perspectiva más pormenorizada de la magnitud, la naturaleza, los motivos y el impacto de los ataques contra la educación y la variedad de respuestas que se están implementando o podrían ponerse en práctica;
- tres ensayos temáticos que presentan un análisis más exhaustivo sobre cómo proteger eficazmente a escuelas y universidades;
- reseñas de los 30 países más gravemente afectados, con una introducción al contexto en que se producen los ataques, una lista detallada de ataques contra la educación denunciados entre 2009 y 2012, y una descripción general de los ataques que tuvieron lugar en los primeros nueve meses de 2013; y
- notas finales, donde se citan las fuentes de todos los datos utilizados en el estudio.

La versión completa del estudio *Ataques a la Educación 2014* se encuentra disponible en línea, en www.protectingeducation.org

RESUMEN

El presente estudio global analiza amenazas o instancias de uso deliberado de la fuerza contra estudiantes, docentes, académicos, miembros de sindicatos de educación, funcionarios gubernamentales, trabajadores del sector humanitario y otros miembros del personal educativo, así como también contra escuelas, universidades y otras instituciones educativas, perpetrados por motivos políticos, militares, ideológicos, sectarios, étnicos o religiosos durante el período 2009-2013, además del uso militar de edificios y predios educativos.

Aborda, en particular, ataques deliberados cometidos por miembros de las fuerzas militares y de seguridad del Estado y grupos armados no pertenecientes al Estado contra establecimientos educativos, estudiantes o personal, pero no supuestos de muerte, lesiones o destrucción provocados como resultado de haber sido alcanzados por el fuego cruzado en un enfrentamiento.

No analiza ataques contra escuelas llevados a cabo por individuos armados que actúan solos y no persiguen ninguno de los motivos anteriores ni adhieren a las ideologías expuestas precedentemente, como por ejemplo, el ataque armado que tuvo lugar en 2012 en Sandy Hook, Estados Unidos.





Un joven afgano revisa los libros de texto quemados por la explosión de una bomba que provocó la muerte del director e hirió a otro empleado en una escuela de la provincia de Nangarhar, Afganistán, 15 de marzo de 2011.

© 2011 AP Photo/Rahmat Gul

El presente estudio, basado en otros informes anteriores publicados por la UNESCO en 2007 y 2010, representa el análisis más exhaustivo de los ataques contra la educación hasta la fecha. A partir de la recopilación de un gran volumen de datos correspondientes al período 2009-2012 e información sobre incidentes trascendentales ocurridos durante los primeros nueve meses de 2013, llega a la conclusión de que, en los últimos cinco años, diversos grupos armados no pertenecientes al Estado, miembros de las fuerzas militares y de seguridad del Estado y organizaciones delictivas armadas han atacado a miles de alumnos de escuelas, estudiantes universitarios, docentes, académicos y establecimientos educativos en, al menos, 70 países en todo el mundo.

El estudio brinda información detallada sobre 30 países en los cuales se observó un patrón significativo de ataques durante el período de cinco años contemplado por el informe y enumera otros 40 países donde se produjeron ataques aislados.

Concluye que se están produciendo ataques deliberados contra la educación e incidentes de uso militar de escuelas y universidades en muchos más países y con una intensidad mucho mayor de la que se había documentado anteriormente. Se ignora si esto refleja una mayor concienciación sobre el problema y la existencia de más y mejores mecanismos para denunciar estos ataques desde que se publicaron los anteriores estudios sobre el tema, o si acaso se trata de un incremento concreto en la cantidad de ataques.

En muchos de los ataques, se bombardean o incendian escuelas o universidades; o estudiantes, docentes y académicos son asesinados, heridos, secuestrados, aprehendidos o detenidos ilegalmente, o torturados. Cientos de estas personas han muerto, y otros cientos de miles han perdido la oportunidad de ejercer su derecho a la educación. En muchos sitios, los niños y jóvenes, y también sus docentes, viven atemorizados por la posibilidad de sufrir ataques.

De los 30 países analizados, en todos se han registrado cinco o más incidentes o víctimas, con al menos un ataque directo contra una escuela o la muerte de al menos un docente, estudiante o académico. Estos países son Afganistán, Bahréin, Birmania, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel/Palestina, Kenia, Libia, Mali, México, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana (RCA), República Democrática del Congo (RDC), Rusia, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Turquía, Yemen y Zimbabwe.



Los otros 40 países donde se informaron ataques aislados son Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Brasil, Camboya, Chad, Chile, China, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Francia, Georgia, Guatemala, Haití, Irlanda, Kirguistán, Liberia, Malawi, Malasia, Maldivas, Nepal, Papua



“Maestros de escuelas: ¡Vamos a matarlos!”

Entre enero y septiembre de 2013, cerca de 30 docentes habrían muerto en agresiones armadas en Nigeria, en algunos casos, mientras se encontraban dando clases. Associated Press informó que, en una declaración realizada mediante una grabación de video en julio de 2013, Abubakar Shekau, líder de las milicias islamistas Boko Haram, amenazó a docentes con la advertencia: “¿Maestros de escuelas que enseñan educación occidental? ¡Vamos a matarlos! ¡Vamos a matarlos!”. También reivindicó una serie de ataques recientes contra escuelas e instó a incendiar aquellas que no fueran islámicas. Boko Haram, una milicia islamista cuyo nombre significa “la educación occidental es pecado”, ha procurado imponer una modalidad estricta de la sharía, o ley islámica, en el norte de Nigeria, y destruyó parcialmente o incendió 50 escuelas durante los primeros siete meses de 2013, según datos de Amnistía Internacional.

Nueva Guinea, Reino Unido, República Dominicana, Ruanda, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Suecia, Togo, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam.

Un docente se asoma al interior de un albergue estudiantil, ahora desierto, en la Escuela Secundaria Estatal de Mamudo, estado de Yobe, Nigeria, donde hombres armados asesinaron al menos a 22 estudiantes y un docente en medio de la noche, el 6 de julio de 2013.

© 2013 Aminu Abubakar/AFP/Getty Images



Una mujer pasa delante de las ruinas de una escuela islámica que fue arrasada por las llamas en Meiktila, Birmania. En marzo de 2013, una turba de más de 200 budistas quemó la escuela y causó la muerte de 32 estudiantes musulmanes y 4 docentes.

© 2013 REUTERS/Damir Sagolj



Escuela incendiada por turba sectaria

La educación en Birmania sufrió una nueva y violenta embestida de los nacionalistas budistas en las regiones centrales y orientales durante 2013, cuando varias escuelas y estudiantes fueron atacados en el contexto de brotes de violencia sectaria. En un incidente ocurrido en marzo de 2013, una turba de 200 budistas avanzó sobre una escuela musulmana en Meiktila, según trascendió en los medios. Los maestros se enteraron de que este grupo se acercaba y llevaron a los estudiantes a una zona de arbustos cercana a la escuela para resguardarlos. Cuando la turba llegó a la escuela, incendiaron el edificio y salieron en búsqueda de los alumnos. Al encontrarlos, los golpearon con palos de madera y, en algunos casos, los rociaron con gasolina y los prendieron fuego. También decapitaron a un alumno que se había escondido entre los matorrales. En total, 32 estudiantes y cuatro docentes fueron asesinados. Posteriormente, siete budistas fueron encarcelados en relación con la masacre en esta escuela.

El estudio se distingue de las ediciones de 2007 y 2010 de Ataques a la Educación en que contempla un período distinto, la investigación contó con muchos más recursos y se intentó dar una cobertura integral a un espectro más amplio de incidentes. En particular, en comparación con los dos estudios anteriores, se incorporó el análisis del uso militar de edificios y predios educativos y de los ataques contra la educación superior. Por lo tanto, es difícil extraer conclusiones sobre tendencias en el tiempo al comparar los datos de este estudio con los de otros anteriores.

Para este trabajo, el equipo de investigación recopiló datos provenientes de una amplia variedad de fuentes secundarias —incluido el Mecanismo de supervisión y presentación de informes de las Naciones Unidas (ONU), investigaciones llevadas a cabo por organizaciones de derechos humanos e información publicada por medios de comunicación— con distintos fines y diversos niveles y métodos de verificación. También se obtuvo información a través de pedidos enviados a órganos de la ONU y a ONG locales e internacionales, entrevistas telefónicas con especialistas de los distintos países y, en algunos casos, por medio de otras investigaciones realizadas en los países en cuestión por investigadores y periodistas de derechos humanos de vasta trayectoria. Los hallazgos provenientes de las distintas fuentes han sido ordenados, resumidos y cotejados entre sí para asegurar su fiabilidad y exactitud.

Además, el estudio fue revisado detenidamente por especialistas en derechos humanos, derecho internacional, educación en contextos de emergencia y metodología de investigación. No obstante, no ha sido posible verificar todos los incidentes. El estudio intenta estimar la magnitud y la naturaleza de los ataques violentos contra la educación en los 30 países examinados, así como el uso militar de escuelas y universidades. Analiza, asimismo, el impacto que esto ha causado en la educación y las respuestas que comunidades y gobiernos —con la ayuda de organismos nacionales e internacionales— han ofrecido para abordar el problema. Para ello, toma como base los conocimientos acumulados sobre el efecto de los ataques desde que el tema comenzó a estudiarse a nivel global, y examina ejemplos de buenas prácticas de todo el mundo.

Países examinados donde se registran denuncias de ataques contra la educación y uso militar de escuelas y universidades, 2009-2012

Países muy gravemente afectados

donde se documentaron 1.000 o más ataques a escuelas, universidades, personal y estudiantes, o donde 1.000 o más estudiantes, docentes u otro personal educativo sufrieron ataques o edificios educativos fueron atacados o utilizados con fines militares.

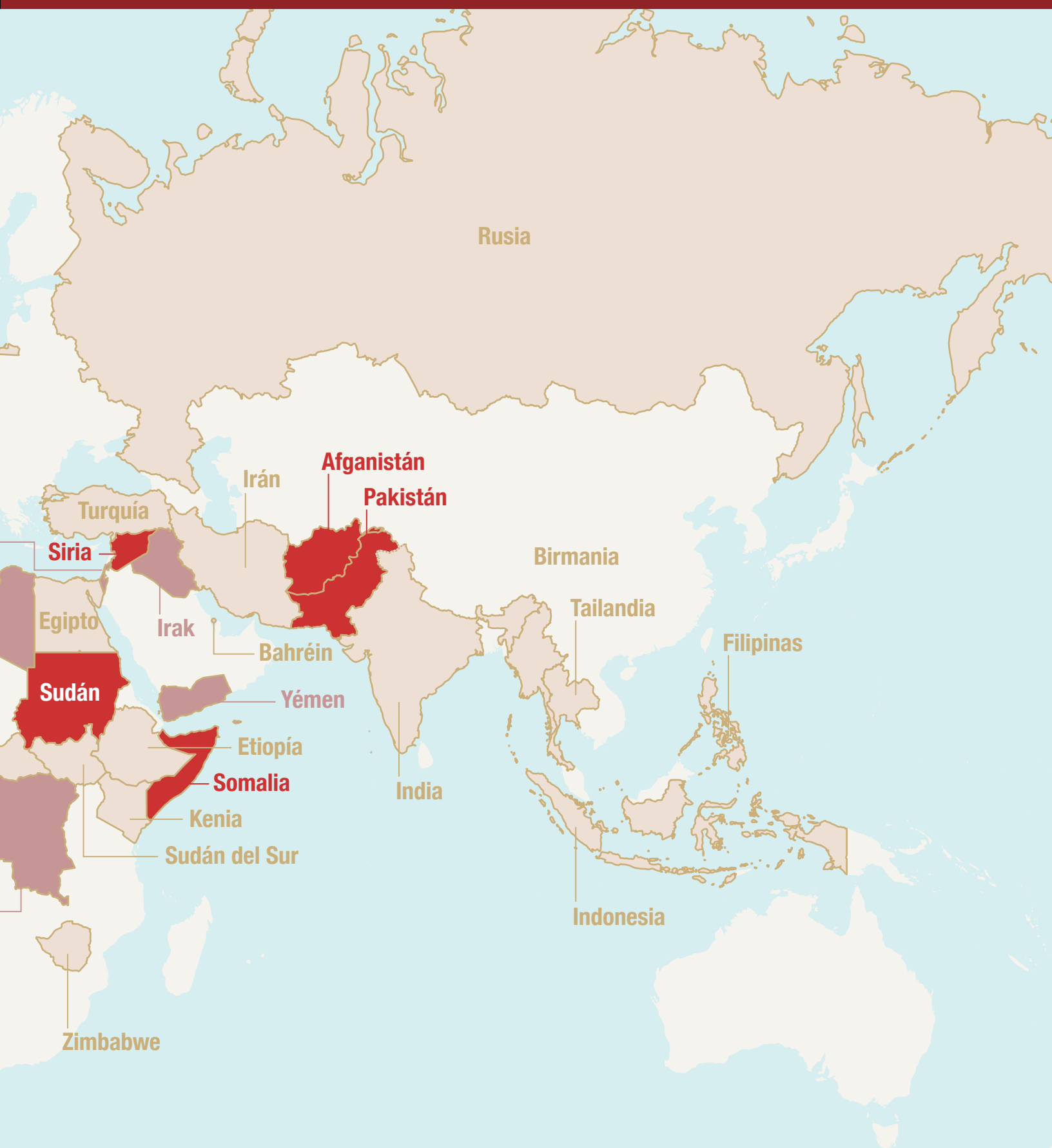
Países gravemente afectados

donde se documentaron entre 500 y 999 ataques a escuelas, universidades, personal y estudiantes, o donde entre 500 y 999 estudiantes, docentes u otro personal educativo sufrieron ataques o edificios educativos fueron atacados o utilizados con fines militares.

Otros países afectados

donde se documentaron menos de 500 ataques a escuelas, universidades, personal y estudiantes, o donde menos de 500 estudiantes, docentes u otro personal educativo sufrieron ataques o edificios educativos fueron atacados o utilizados con fines militares.





Los países muy gravemente afectados —donde se documentaron 1.000 o más ataques a escuelas, universidades, personal o estudiantes, o donde 1.000 o más estudiantes, docentes u otro personal educativo sufrieron ataques o edificios educativos fueron atacados o utilizados con fines militares— fueron Afganistán, Colombia, Pakistán, Siria, Somalia y Sudán. Por ejemplo, durante ese período:

- En Afganistán, según datos de la ONU, hubo 1.110 o más ataques contra la educación escolar, que incluyeron incendios intencionales, ataques con explosivos y atentados suicidas con bombas. Hubo incidentes de amenazas, secuestros y asesinatos que tuvieron como víctimas a trabajadores de escuelas.
- En Colombia, uno de los sitios más peligrosos para ejercer la docencia, 140 docentes fueron asesinados en esos cuatro años, y 1.086 recibieron amenazas de muerte, según el Ministerio de Educación. Asimismo, 305 se vieron obligados a abandonar sus viviendas para preservar su vida, de acuerdo con datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), una prestigiosa ONG colombiana que hace un seguimiento de la situación de los derechos sindicales.
- En Pakistán, diversos grupos armados, en particular la rama paquistaní de los talibanes, atacaron al menos 838 escuelas —en la mayoría de los casos, provocando explosiones en los edificios— y privaron a cientos de miles de niños de la posibilidad de acceder a educación, según una investigación primaria realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, una organización independiente. Cerca de 30 alumnos de escuela y 20 docentes fueron asesinados, 97 alumnos y 8 docentes resultaron heridos, y 138 estudiantes y miembros del personal fueron secuestrados. Un alumno de educación superior y cuatro académicos fueron asesinados, y decenas de estudiantes universitarios sufrieron lesiones.

Otros países gravemente afectados —donde se documentaron entre 500 y 999 ataques a escuelas, universidades, personal y estudiantes, o donde entre 500 y 999 estudiantes, docentes u otro personal educativo sufrieron ataques o edificios educativos fueron atacados o utilizados con fines militares en el período 2009-2012— fueron Costa de Marfil, RDC, Irak, Israel/Palestina, Libia, México y Yemen.

Por ejemplo, en Yemen, hubo 720 incidentes de uso de la fuerza o violencia que afectaron a escuelas entre 2009 y 2012. En Costa de Marfil, durante el período 2010-2011, 50 estudiantes universitarios fueron atacados y varios establecimientos universitarios fueron ocupados; a su vez, en 2011, al menos 477 escuelas fueron destruidas, dañadas, saqueadas o utilizadas por grupos armados durante hechos de violencia ocurridos luego de elecciones.

No obstante, en todos estos países, no existen precisiones acerca de la cantidad exacta de ataques que han estado concretamente dirigidos a establecimientos educativos, estudiantes o personal

del sector, dado que la información disponible no es específica.

Algunos incidentes individuales dejaron como saldo una gran cantidad de víctimas. Por ejemplo, en Somalia, en octubre de 2011, un atentado suicida con explosivos perpetrado por un miembro de Al-Shabaab provocó la detonación de un camión cargado con barriles de combustible junto a un complejo en Mogadishu donde tenían sede diversos ministerios, incluido el de Educación, y causó la muerte de al menos 100 personas, muchas de ellas estudiantes y padres. En un mensaje grabado previamente, el terrorista manifestó que su objetivo era atacar a estudiantes que se reunirían en el Ministerio de Educación para conocer los resultados de exámenes que les permitirían solicitar becas de estudio en el exterior. Los motivos que, según se informó, inspiraron los ataques contra escuelas, estudiantes, docentes y otros miembros del personal educativo, incluyen la intención de:

- destruir símbolos de control gubernamental o demostrar control respecto de un área por parte de grupos contrarios al gobierno;
- impedir la educación de las niñas, o cualquier tipo de educación que se perciba que transmite o impone valores religiosos o culturales foráneos, una versión sesgada de la historia o un lenguaje de instrucción no familiar;
- restringir la actividad sindical docente y la libertad académica;
- secuestrar a niños para convertirlos en soldados, esclavos sexuales o apoyo logístico durante operativos militares, o secuestrar a estudiantes y docentes a cambio de rescates; o
- tomar escuelas para utilizarlas como cuarteles, bases o puestos de tiro, o atacar escuelas debido a que están siendo usadas para estos fines por fuerzas opositoras.





Alumnos sentados en un aula improvisada en el patio de la Escuela Media Birhni, en el distrito de Aurangabad, estado de Bihar, India. La escuela fue atacada con explosivos por las guerrillas maoístas el 27 de diciembre de 2009.

© 2010 Moises Saman/Magnum Photos for Human Rights Watch



Luego de que fuerzas rebeldes ocuparan la población, uno de los soldados recorre un aula abandonada, utilizada como depósito de armas por el ejército congoleño, en Bunagana, RDC, 7 de julio de 2012.

© 2012 REUTERS/James Akena



Países examinados donde se registró uso militar de escuelas y universidades, 2009-2012



Uso de estudiantes como escudos humanos

En Somalia, milicias armadas usaron escuelas como bases para desplegar ataques contra fuerzas opositoras, y convirtieron así a estos establecimientos en objeto de ataques mientras estudiantes y docentes aún estaban dentro. Según se indica en el informe *No place for children: Child recruitment, forced marriage and attacks on schools in Somalia* (Contextos no aptos para niños: reclutamiento infantil, matrimonio forzado y ataques contra escuelas en Somalia), publicado por Human Rights Watch en 2012, en algunos casos, las milicias islamistas de Al-Shabaab encerraron a estudiantes y docentes atemorizados en las escuelas y los usaron como escudos humanos mientras lanzaban artillería contra fuerzas del Gobierno Federal de Transición (GFT) y la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) desde la parte trasera de las escuelas o desde predios escolares. En 2010, un alumno de escuela primaria informó que, durante una clase, combatientes de Al-Shabaab comenzaron a lanzar municiones que parecían proyectiles desde atrás de la escuela sin que se interrumpieran las actividades. “AMISOM/GFT comenzó a responder... La escuela fue alcanzada por artillería que, al acercarse, producía un sonido similar al de un trueno y después hubo una gran explosión”, relató a Human Rights Watch. Tres niños murieron en el ataque y seis sufrieron lesiones.

usaron las escuelas para albergar a personal de seguridad e inteligencia o como puestos desde donde podían lanzar proyectiles hacia zonas aledañas. Si bien se presume que la mayoría de estos incidentes ocurrieron antes de 2013, no hay pruebas suficientes que confirmen este dato.

Además de Siria, en los otros 14 países con los niveles más altos de incidencia de uso militar informada en el período 2009-2012 —Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, India, Libia, Mali, Pakistán, RCA, RDC, Somalia, Sudán del Sur, Tailandia y Yemen— al menos 923 escuelas y universidades fueron usadas por grupos armados, fuerzas armadas, fuerzas policiales y fuerzas internacionales para fines militares durante esos cuatro años. En Libia, por ejemplo, grupos armados habrían utilizado 221 escuelas durante la rebelión de 2011; y en la región este y noreste de la India, durante 2010, diversas fuerzas gubernamentales habrían usado al menos 129 escuelas como cuarteles o bases durante el conflicto con insurgentes maoístas y otros grupos armados.

En los países donde se registraron incidentes de uso militar, las escuelas y universidades fueron utilizadas como cuarteles para albergar a soldados o combatientes, o como bases desde donde se diseñaron operativos de seguridad. Sirvieron, además, como puestos de combate, cárceles o centros de detención, centros de tortura o interrogatorios, y depósitos de armas. En algunos sitios, también se usaron edificios de escuelas para adoctrinar, reclutar y entrenar a estudiantes. En Mali, por ejemplo, niños de apenas 11 años habrían recibido entrenamiento por parte de grupos armados en escuelas privadas, públicas y de enseñanza del Corán.

Uso militar de instituciones educativas

Entre 2009 y 2012, en 24 de los 30 países relevados se utilizaron predios de escuelas y universidades para fines militares, a saber: Afganistán, Birmania, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Israel/Palestina, Kenia, Libia, Mali, Pakistán, RCA, RDC, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Yemen y Zimbabue.

El país con la mayor cantidad de incidentes registrados fue Siria, donde el uso militar relacionado con el conflicto se intensificó de manera dramática en el período 2011-2012. Si bien no se aportan cifras precisas, la ONU informó numerosos incidentes en los que fuerzas gubernamentales utilizaron escuelas como bases o centros de detención provisorios, y hubo versiones de que, en varias regiones, el Ejército Sirio Libre usó escuelas como bases y depósitos de municiones durante ese período. Asimismo, la Red Siria para los Derechos Humanos denunció, a mediados de enero de 2013, que fuerzas gubernamentales habían utilizado aproximadamente 1.000 escuelas como centros de detención y tortura, y

Fuerzas armadas del Estado y grupos armados no pertenecientes al Estado ponen en riesgo la vida de estudiantes, docentes y otro personal del sector cuando utilizan escuelas y universidades para fines militares sin antes organizar su evacuación, ya que la presencia militar podría ciertamente atraer el fuego enemigo. En muchos casos, debido al uso militar, se altera o directamente se interrumpe la enseñanza, ya que los padres retiran a sus hijos de la escuela para preservar su seguridad, o bien las escuelas se cierran. Incluso si las escuelas están vacías, el uso militar puede igualmente dañar las instalaciones o contribuir a que estos establecimientos sean destruidos en ataques posteriores.

Reclutamiento de niños y violencia sexual en escuelas o en el trayecto de ida y vuelta a la escuela

Este estudio analiza actos de reclutamiento y violencia sexual que tienen por víctimas a niños, únicamente cuando tales abusos se produjeron en escuelas o en el trayecto de ida y vuelta a estas. En ocasiones, los grupos y fuerzas armadas se despliegan especialmente en estos sitios porque saben que allí encontrarán niños.

En seis países, se hallaron evidencias de que, entre 2009 y 2012, grupos armados y organizaciones delictivas armadas habrían reclutado a niños cuando estos se encontraban en escuelas o en el trayecto de ida o de vuelta: Colombia, Pakistán, RDC, Somalia, Tailandia y Yemen.

El reclutamiento se produjo por diversas razones. Por ejemplo, en Colombia, menores reclutados fueron usados por grupos armados como espías o para transportar armas o transmitir mensajes a otros alumnos en escuelas, y también para administrar la venta de drogas en las escuelas. En Pakistán, las milicias reclutaron, persuadieron o secuestraron a niños de escuelas tradicionales y madrassas (escuelas religiosas), en algunos casos, con el propósito de entrenarlos para que cometieran atentados suicidas.

Los métodos de reclutamiento incluyeron programas de adoctrinamiento en escuelas, amenazas de muerte contra estudiantes si no accedían a ser reclutados, secuestros durante los trayectos de ida y vuelta a las escuelas e irrupción en colegios para llevarse

alumnos. En Colombia, grupos armados aguardaron fuera de las escuelas para hablar con los niños cuando estos salían, obtener información y luego reclutarlos o controlarlos; en Yemen, rebeldes houthi usaron a alumnos y maestros para reclutar niños; y en la RDC, un grupo rebelde separatista secuestró en forma masiva a niños de escuelas para sumarlos a sus filas.

Las evidencias más contundentes de reclutamiento sistemático en escuelas se obtuvieron en Somalia, donde la ONU informó que, durante 2010, Al-Shabaab secuestró a 2.000 niños para que recibieran entrenamiento militar, y en 2011 reclutó a otros 948, en su mayoría en escuelas. Human Rights Watch denunció casos en que Al-Shabaab secuestró a niñas de las escuelas para obligarlas a contraer matrimonio con combatientes. En un caso, las milicias decapitaron a una joven de 16 años que se negó a contraer matrimonio con un comandante mucho mayor que ella, y llevaron su cabeza a la escuela para exhibirla ante las demás jóvenes en señal de advertencia.

Hubo, asimismo, versiones aisladas sobre hechos de violencia sexual cometidos por miembros de fuerzas o grupos armados en escuelas o en los trayectos de ida y vuelta a estos establecimientos en la RDC y en Somalia durante el período 2009-2012. También se denunciaron dos incidentes en la India y la RCA en 2012-2013. Si bien es posible que estos ataques sean más frecuentes, la denuncia pública de actos de violencia sexual suele ser muy limitada y, cuando efectivamente se denuncia, en general no se especifica si la violencia tuvo lugar durante el trayecto de ida o vuelta a la escuela o dentro del establecimiento escolar.

Niños llevados de escuelas

Según ha señalado Human Rights Watch, en abril de 2012, en la RDC, seguidores del general rebelde Bosco Ntaganda, que anteriormente había pertenecido al ejército congoleño, irrumpieron en la escuela secundaria Mapendano, en la provincia de Kivu del Norte, y se llevaron a 32 alumnos varones. Este es uno de los métodos que aplicaron para el reclutamiento forzado de alumnos de escuelas cuando los residentes locales se negaron a entregar a sus hijos. Un estudiante de 17 años refirió a Human Rights Watch que soldados ingresaron en su escuela al finalizar el horario de clases, llevaron a los alumnos afuera, les ataron las manos y los obligaron a salir marchando del edificio para sumarse a las fuerzas que combatían para Ntaganda. Recibieron entrenamiento en un campamento militar. Los jóvenes que mostraron resistencia fueron golpeados, y a otros les advirtieron que los matarían si intentaban escapar. En un caso, un joven de 16 años que fue reclutado relató a Human Rights Watch el accionar de los hombres de Ntaganda durante la noche: “Nos ponían granadas y nos decían que si nos movíamos, iban a explotar”. En las aldeas, numerosos niños y jóvenes huyeron hacia la frontera con Ruanda por temor a ser reclutados.



Fuerzas de seguridad relevan el emplazamiento donde se produjo un doble atentado suicida talibán con explosivos que se cobró la vida de, al menos, cinco personas en la Universidad Islámica Internacional en Islamabad, Pakistán, 20 de octubre de 2009.

© 2009 REUTERS/Adrees Latif

Ataques contra la educación superior

El estudio identificó ataques contra establecimientos, estudiantes y académicos de educación superior, y en 28 de los 30 países relevados se informó el uso militar de universidades en el período 2009-2012. Las excepciones fueron la RCA y Mali.

A diferencia de la mayoría de los ataques contra escuelas, los ataques violentos contra la educación superior suelen producirse en situaciones que no son de conflicto —si bien también ocurren en países afectados por guerras— y generalmente incluyen la aprehensión o detención arbitrarias y la persecución de determinados estudiantes y docentes.

Numerosos ataques contra la educación superior están vinculados con esfuerzos del gobierno por evitar el crecimiento de movimientos de oposición; restringir las protestas políticas, incluidas aquellas relativas a la política educativa; impedir protestas contra el gobierno en el ámbito universitario; sofocar cualquier actividad sindical en el sector educativo o cercenar la libertad de académicos e investigadores para analizar y debatir temas sensibles o visiones alternativas a la política gubernamental. Al igual que en los casos de violencia contra estudiantes y docentes de escuelas, los ataques contra la educación superior

también pueden involucrar ideologías sectarias y la persecución de grupos étnicos.

Durante el período 2009-2013, la mayoría de los ataques contra edificios educativos se centraron en escuelas antes que en instituciones de educación superior. No obstante, se produjeron ataques contra establecimientos de educación superior en, al menos, 17 países: Afganistán, Costa de Marfil, Egipto, Filipinas, Irán, Irak, Israel/Palestina, Libia, México, Nigeria, Pakistán, RDC, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen. En México, por ejemplo, un grupo que se oponía a la investigación en nanotecnología presuntamente habría detonado explosivos en seis campus universitarios y laboratorios de investigación y amenazado a otros seis en 2011; y en Siria, dos explosiones en la Universidad de Aleppo provocaron la muerte de, al menos, 82 personas e hirieron a varias decenas de víctimas, posiblemente cerca de 150, en la primera jornada de los exámenes parciales de enero de 2013.

En los ataques perpetrados por grupos armados, las explosiones estuvieron entre los incidentes más frecuentes, junto con los asesinatos y los secuestros. Las fuerzas de seguridad del Estado también recurrieron a aprehensiones o detenciones arbitrarias y al uso excesivo de la fuerza que, en ocasiones, provocó muertes y lesiones. También se registraron incidentes en que fuerzas

Países relevados donde se produjeron ataques contra establecimientos, estudiantes y personal de educación superior, 2009-2012



Ataque a convoy estudiantil

En mayo de 2010, al menos 100 estudiantes resultaron heridos durante un ataque contra un convoy de autobuses, según informó la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Irak (UNAMI). Los autobuses transportaban a estudiantes universitarios de localidades y poblaciones cristianas en la llanura de Nínive que se dirigían a la Universidad de Mosul, y eran escoltados por fuerzas iraquíes. Un primer coche bomba explotó cuando los autobuses que iban por delante cruzaban un puesto de control en la frontera interna que separa la región semiautónoma kurda del resto del país. Poco después, estalló otro explosivo junto a la carretera, según trascendió en The New York Times. En las zonas aledañas a la Universidad de Mosul ya se habían producido varios ataques y amenazas en 2009, y por eso los estudiantes se trasladaban en este tipo de convoyes. Los ataques contra estudiantes cristianos formaron parte de una oleada que incluyó varias decenas de atentados contra cristianos perpetrados en Irak durante 2010. Según Worldwatch Monitor, casi 1.000 alumnos se ausentaron de sus clases durante el resto del semestre luego del atentado al convoy.

armadas o servicios de seguridad del Estado, grupos rebeldes y guerrillas ocuparon o cerraron universidades.

El mayor número de víctimas entre alumnos de educación superior durante 2009-2012 se registró en Yemen, donde más de 73 estudiantes fueron asesinados y más de 139 resultaron heridos en 2011, si bien se desconoce cuántas personas formaban parte de los objetivos de ataque. Sudán sería el país con mayor número de detenciones arbitrarias de estudiantes: más de 1.040 fueron arrestados por agentes de seguridad, la mayoría durante protestas vinculadas con educación o que comenzaron o se desarrollaron en instituciones educativas, según versiones de los medios y de organizaciones de derechos humanos.

En algunos de los incidentes más graves, las fuerzas de seguridad o grupos armados requisaron habitaciones de residencias estudiantiles u otros alojamientos en campus en Costa de Marfil, Indonesia, Irán, Nigeria, Pakistán, Siria y Sudán. En septiembre de 2013, hombres armados irrumpieron violentamente, en medio de la noche, en una residencia de una institución terciaria en Yobe, Nigeria, y asesinaron a nada menos que 50 estudiantes. En 2011 y 2012, miembros de las fuerzas de seguridad de Siria irrumpieron en residencias estudiantiles de universidades en Alepo y Damasco, y provocaron la muerte de siete estudiantes, hirieron a 49 y arrestaron a 330, según versiones de los medios. En Sudán, cerca de 450 habitaciones estudiantiles en la Universidad Islámica Omdurman en Khartoum habrían sido incendiadas por agentes de seguridad y simpatizantes del Partido del Congreso Nacional en diciembre de 2012.

Impacto a largo plazo de los ataques

En algunos países, las autoridades de educación o las ONG han documentado la cantidad de incidentes de deterioro o destrucción de escuelas, o la cantidad de docentes o estudiantes asesinados o heridos. Sin embargo, existe escasa información con respecto a cómo estos ataques afectan la enseñanza a largo plazo, y menos aún sobre su impacto social y económico en general. Por lo tanto, el análisis que ofrece el estudio sobre los efectos a largo plazo no se limita a situaciones en que se produjeron ataques durante el período relevado, sino que también toma en cuenta experiencias en países que documentaron ataques en el pasado.

Cuando los ataques contra escuelas, estudiantes y docentes son persistentes o el uso de la fuerza —ya sea que se manifieste efectivamente o a través de amenazas— impide la recuperación luego de un ataque, las consecuencias, que menoscaban la posibilidad de los estudiantes de alcanzar resultados satisfactorios y acceder a educación de calidad, son, entre otras, las siguientes:

- desmotivación y distracción persistente de estudiantes, docentes y otros miembros del personal educativo debido a temor, malestar anímico o trauma;

- discontinuidad crónica de la asistencia o deserción permanente por parte de estudiantes, docentes y otros miembros del personal educativo;
- reducción en la contratación de personal, que provoca escasez de docentes, y merma en la cantidad de alumnos inscriptos, lo cual menoscaba las iniciativas nacionales e internacionales orientadas a alcanzar la Educación para Todos (EPT), va en detrimento de la intención de garantizar la educación primaria universal y afecta otros importantes objetivos en materia educativa.

Si bien todos estos efectos tienen dimensiones a corto, mediano y largo plazo, cuanto más se prolonguen los ataques o cuánto más tiempo persista la violencia que impide la recuperación, es probable que las consecuencias sean más profundas y duraderas.

En países donde los ataques han persistido de manera significativa a lo largo de los años —numerosos países sufrieron ataques contra la educación mucho antes del inicio del período relevado por este estudio—, el cierre de escuelas durante períodos prolongados ha implicado privar a cientos de miles de niños del acceso a educación, a veces durante meses o incluso años. Por ejemplo, en Yemen, 54 escuelas permanecieron cerradas por hasta dos meses luego de que se produjeran 143 ataques contra la educación en 2011, y este hecho afectó a 182.000 estudiantes. En Afganistán, el Ministerio de Educación informó el cierre de más de 590 escuelas en áreas vulnerables hasta mayo de 2012, en comparación con las 800 o más que se cerraron en 2009. En ocasiones, las amenazas a la seguridad o el uso militar por períodos prolongados impiden su reconstrucción o reapertura, tal como sucedió en la India, donde para 2009, la policía ocupaba varias escuelas desde hacía tres años, y una de ellas desde hacía una década, y en Sudán del Sur, donde fuerzas armadas ocuparon algunas escuelas hasta por cinco años. A menudo, cuando se provoca el deterioro o la destrucción de escuelas, el gobierno no tiene capacidad ni voluntad para reconstruirlas en un plazo razonable.

En el caso de la educación superior, los ataques no solo pueden poner en riesgo vidas humanas e interrumpir la educación, sino que, además, tienen consecuencias devastadoras para la investigación y la enseñanza, ya que obligan a comunidades académicas enteras a vivir atemorizadas, huir de su lugar de pertenencia o recurrir a la autocensura. También alteran la formación de los docentes, planificadores educativos y directivos.

Los ataques contra la educación también pueden tener graves efectos psíquicos a corto o largo plazo, que incluyen distracción, angustia y menor capacidad de estudio o de enseñanza.

Entre las consecuencias más generales y a largo plazo para la sociedad se incluyen un menor desarrollo —especialmente en casos de ataques contra la educación superior— y la imposibilidad de que surja y se fortalezca la pluralidad política, la rendición de cuentas gubernamental y la democracia abierta.

Respuesta y prevención

Entonces, ¿qué se puede hacer para impedir que se produzcan ataques contra la educación? ¿Y cómo se puede limitar su impacto? Si bien se ha reunido más información sobre prevención y respuestas desde la última edición del estudio Ataques a la Educación, en 2010, aún no existen investigaciones empíricas y comparativas rigurosas sobre la efectividad de las distintas medidas; en parte, debido a los significativos problemas metodológicos que plantea este tipo de indagación. Aún se necesita comprender más cabalmente cuáles son las ventajas concretas de un tipo de intervención en comparación con otro, tomando en cuenta la naturaleza de los ataques, los responsables y sus motivos, el contexto específico y los posibles efectos secundarios negativos y consecuencias no deseadas. No obstante, existen ejemplos de medidas que han sido adoptadas por organismos internacionales, gobiernos de países, ONG y comunidades para responder a ataques y para prevenirlos, tanto antes del período abarcado por este estudio como durante ese lapso.

Supervisión y presentación de informes

Las acciones efectivas de supervisión, evaluación y presentación de informes son cruciales para que los gobiernos, los órganos de la ONU y las ONG adopten las medidas de prevención y respuesta pertinentes. Uno de los acontecimientos más significativos durante el período de relevamiento fue la aprobación de la Resolución 1998 del Consejo de Seguridad de la ONU en julio de 2011, que estableció a los ataques contra escuelas y personal escolar como un factor que da lugar a la inclusión en los anexos del informe anual del Secretario General de la ONU sobre los niños y los conflictos armados. Esto, a su vez, exige que las partes en contravención desarrollen planes de acción para poner fin a tales ataques; si no lo hacen, deberán enfrentar las consecuencias, que pueden incluir sanciones específicas aplicadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La aprobación de la Resolución 1998 ha asegurado una mayor atención, por parte de la ONU, a los ataques contra escuelas y docentes en el monitoreo y la presentación de informes que llevan a cabo los Equipos de Tareas de los Países que integran el Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes (Monitoring and Reporting Mechanism, MRM) de la ONU sobre graves violaciones contra niños en situaciones de conflicto armado. No obstante, hasta el momento, el Mecanismo se ha aplicado en una cantidad reducida de países, que habitualmente asciende a 13 ó 14 por año, aproximadamente. Sí se aplicó en muchos de los países muy gravemente o gravemente afectados —aunque no en todos—, o en algunos de los demás países relevados donde se observó un patrón significativo de ataques contra la educación. Esto se debió, en parte, a que la activación del MRM requiere un alto estándar de verificación de incidentes e identificación de responsables por parte de la ONU. Asimismo, su ámbito de incumbencia permite únicamente que opere en situaciones de conflicto armado, y varios países donde se registró un

importante número de ataques a la educación no son reconocidos como situaciones de conflicto, por ejemplo, México y Zimbabwe.

En la mayoría de los países afectados por ataques a la educación, aún existe la necesidad de fortalecer los lazos de supervisión y presentación de informes entre agencias de la ONU, ONG nacionales e internacionales, y ministerios de educación y secretarías de educación a nivel de distrito, a fin de optimizar la obtención y verificación de datos relativos a ataques contra escuelas (que incluyan información sobre el impacto a largo plazo para la educación).

También existe una necesidad imperiosa de salvar las brechas en la supervisión y presentación de informes sobre ataques contra la educación superior a nivel global. El monitoreo de tales ataques no es una de las funciones del MRM coordinado por la ONU, que centra su labor en graves violaciones cometidas contra niños y, por lo tanto, se enfoca únicamente en incidentes relacionados con escuelas.

Rendición de cuentas y erradicación de la impunidad

Las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional ofrecen un marco jurídico sólido para proteger la educación, según el contexto. No obstante, la impunidad de los responsables de ataques a la educación continúa siendo un problema persistente que debe ser abordado en forma urgente a nivel nacional e internacional. Se han documentado muy pocas investigaciones sobre ataques o procesos contra los autores de estos actos.

Disminuir o eliminar el uso de escuelas y universidades para fines militares podría reducir considerablemente la cantidad de instituciones educativas que corren riesgo de sufrir ataques, puesto que el uso militar las convierte en potenciales objetivos. El derecho internacional humanitario restringe el uso de escuelas y universidades en apoyo a la acción militar, pero no prohíbe dicho uso en todos los casos.

Algunos países han dado un paso importante al adoptar leyes, jurisprudencia o políticas militares que restringen —y en algunos casos, prohíben totalmente— el uso militar de escuelas o universidades, si bien esta limitación no se aplica de manera sistemática. Entre los ejemplos se incluyen Colombia, Filipinas, India y, más recientemente, Sudán del Sur, que en agosto de 2013 emitió una directiva militar por la cual prohibió a sus fuerzas armadas el uso de escuelas para fines militares.

También resulta alentadora la iniciativa actual, llevada a la práctica por la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA), que propone formular directrices internacionales: las *Directrices de Lucens para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos armados*. La aspiración es que los estados, al adoptar las Directrices, las recepen en su legislación nacional y su doctrina militar, y les otorguen de este modo carácter vinculante a través del derecho



Asociaciones con fines de supervisión y presentación de informes

Decenas de escuelas fueron atacadas durante la crisis poselectoral en que estuvo sumido Costa de Marfil entre diciembre de 2010 y junio de 2011. El Grupo Integrado de Educación trabajó con el Ministerio de Educación para organizar una encuesta nacional a 9.000 escuelas a fin de evaluar el impacto de los ataques contra la educación a nivel nacional.

Según el Grupo Integrado de Educación, el Ministerio de Educación y las autoridades educativas en los distritos fomentaron que los docentes en todas las poblaciones participaran en la obtención de datos para la encuesta en forma manual y por correo electrónico. Intentaron obtener información sobre uso de escuelas con fines militares o como lugares de acogida para desplazados internos, destrucción y saqueo de escuelas, cierre forzado de escuelas por amenazas de violencia, incidentes de explosiones y ataques contra estudiantes.

La encuesta determinó que 477 escuelas habían sufrido destrucción, deterioro o saqueo, o habían sido utilizadas por grupos armados y militares: 180 escuelas habían sido saqueadas, 173 destruidas, incendiadas o dañadas, y 20 atacadas con bombas. La información fue usada posteriormente para exigir que se pusiera fin al uso militar de escuelas. En noviembre de 2011, grupos armados habían evacuado 45 escuelas como resultado de negociaciones, según un estudio realizado por GCPEA.

Soldados de los “Comandos Invisibles” practican técnicas de emboscada en una escuela media utilizada como base en la zona PK-18 del vecindario de Abobo, en Abiyán, Costa de Marfil, 19 de abril de 2011.

© 2011 AP Photo/
Rebecca Blackwell

Policías frente a una escuela con marcas de impactos de balas, Pasto, Colombia, 2010.

© 2010 UNHCR Colombia



interno. Si se persuade a muchos países para que hagan lo mismo, podrían conseguirse avances significativos en la reducción del número de escuelas que están en riesgo de sufrir ataques y la cantidad de estudiantes cuya seguridad —y también su posibilidad de aprendizaje— se encuentra amenazada por la presencia de tropas y armas en sus aulas.

Respuestas militares y en materia de seguridad

Algunas fuerzas militares, autoridades educativas y comunidades han adoptado medidas físicas de protección para resguardar a escuelas y alumnos ante los ataques. Tales medidas incluyen asignar guardias armados o sin armas a instituciones educativas; instalar puestos de control cerca de escuelas; reforzar la infraestructura escolar (por ejemplo, construir muros en el perímetro de las escuelas); ofrecer alojamiento a alumnos o personal en los campus o zonas aledañas; mantener una presencia protectora o escoltas que acompañen a estudiantes o docentes en los trayectos de ida y vuelta a las escuelas; ofrecer modelos de transporte más seguros; y armar a docentes. Muchas de estas medidas se han adoptado, por ejemplo, en la región del extremo sur de Tailandia. En Afganistán, se han usado guardias sin armas.

Pero no todas las medidas han resultado efectivas. En algunos contextos, medidas como la incorporación de escoltas de seguridad pueden resultar contraproducentes y aumentar las probabilidades de que docentes o escuelas sean atacados, dado que ofrecen a los grupos armados la posibilidad de atacar contra soldados y docentes en un mismo incidente. En el sur de Tailandia, por ejemplo, se produjeron numerosos ataques contra soldados que custodiaban a docentes en el trayecto hacia la escuela. En algunos de estos hechos, murieron únicamente soldados, y en otros soldados y docentes.

Soluciones negociadas

En algunos casos, líderes de comunidades locales, grupos armados o fuerzas gubernamentales, funcionarios gubernamentales o actores externos han negociado con las partes agresoras para prevenir o poner fin a ataques o al uso militar de establecimientos educativos, por ejemplo, en la RDC y en Sudán del Sur, donde las fuerzas ocupantes aceptaron evacuar escuelas.

Respuestas de la comunidad

Las comunidades han contribuido a la protección de distintas maneras. En Afganistán, esto ha implicado la intervención de comités de gestión escolar en la protección de escuelas, estudiantes y docentes; la conformación de comités de defensa escolares; la designación de vigilantes durante la noche; y la gestión de escuelas comunitarias o el dictado de clases en viviendas familiares, donde hay menos probabilidades de que ocurran ataques. En Liberia, los padres dispusieron que los estudiantes fueran acompañados por escoltas; en Gaza, se organizó un sistema de alerta comunitaria; en México, los sindicatos de docentes organizaron protestas para exigir medidas de seguridad más efectivas; en Nepal, miembros de la comunidad llevaron adelante negociaciones para asegurar que las escuelas fueran respetadas por ambos bandos del conflicto como zonas de paz; y en Costa de Marfil, directores de escuelas locales colaboraron con el seguimiento de los ataques.

Protección a medida para docentes en riesgo

En Colombia, un Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos de los Docentes, integrado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y representantes del gobierno colombiano y los sindicatos de docentes, brindó apoyo a docentes, académicos y dirigentes sindicales que fueron amenazados o agredidos a través de diversas medidas de protección. A través del análisis individual de casos, varios comités especiales estudiaron el tipo y la magnitud del riesgo y la modalidad de protección que resultaría más efectiva, por ejemplo, escoltas o guardias armados, teléfonos celulares, vehículos blindados y medidas de reubicación temporaria, conforme se indicó en un informe de 2009 de la Internacional de la Educación. En 2010, el gobierno ofreció a los docentes en situación de riesgo “estatus provisional” para que pudieran reubicarse rápidamente mientras esperaban que la policía llevara a cabo una evaluación de riesgo. Según el Ministerio de Educación Nacional, de los 600 miembros del personal educativo que denunciaron haber recibido amenazas de muerte en 2011, 38 se fueron del país, 282 fueron trasladados temporalmente y 38 fueron transferidos en forma permanente.



Abordar el rol de la educación en los conflictos

En el extremo sur de Tailandia, la insurgencia musulmana malaya atacó escuelas, entre otros motivos, debido a que percibían que, en el pasado, estas instituciones habían sido utilizadas para imponer el budismo, la lengua tailandesa y una versión tailandesa de la historia al grupo étnico de los musulmanes malayos. Aproximadamente 59 docentes fueron asesinados entre 2009 y 2012.

Las autoridades de educación determinaron que era posible reforzar la seguridad contra ataques a escuelas y asesinatos de docentes incorporando cambios en el programa de estudio y adoptando políticas sobre contratación de personal que permitieran construir lazos con las comunidades locales.

Algunos de los cambios más significativos fueron el aumento de la cantidad de horas de instrucción religiosa islámica (que se incrementó cinco veces) y el agregado de un sexto día de clase para incorporar los contenidos adicionales, la contratación de miles de maestros musulmanes malayos a nivel local (en lugar de traer docentes budistas tailandeses de otras zonas, que suelen ser las principales víctimas de ataques) y la inclusión de la enseñanza del inglés y el idioma malayo local.



Soldados tailandeses montan guardia en una escuela para custodiar a estudiantes y maestros luego de que su director fuera asesinado una semana antes, presuntamente por milicias separatistas, en la inestable provincia sureña de Narathiwat, Tailandia, 17 de diciembre 2012.

© 2012 MADAREE TOHLALA/AFP/Getty Images

Política y planificación educativa

En países que se encuentran en riesgo de conflicto, abordar los problemas vinculados con la educación puede ser un factor clave para reducir el riesgo de ataques a escuelas, estudiantes y miembros del personal educativo. Si bien la desigualdad en el acceso puede constituir una fuente de tensiones, las autoridades educativas pueden hacer frente al problema asegurando que existan criterios justos para asignar los recursos. Cuando se considere que el programa de estudios tiende a segregar a un grupo étnico debido a que las clases se dictan en un idioma extranjero o bien porque se enseñan valores culturales foráneos, otra religión o una versión distorsionada de la historia, reformar dicho programa puede reducir eventuales motivos de ataques.

Fortalecer, en el programa de estudios, la educación para la resolución pacífica de conflictos, el respeto de los derechos humanos y el civismo responsable también podría ayudar a reducir los conflictos y consolidar la paz. En países donde se han producido ataques contra la educación, cada año que transcurre sin que una escuela sea reacondicionada o reabierta luego de un ataque puede significar un año perdido en la educación de sus estudiantes. Mientras continúa el conflicto, suele ser demasiado peligroso intentar reconstruir escuelas, pero a la vez, cuando este concluye, los gobiernos generalmente no cuentan con los fondos requeridos ni la capacidad necesaria para reparar y reacondicionar las escuelas rápidamente, como ocurrió en Afganistán y, anteriormente, en Sierra Leona. Por consiguiente, superar el impacto de los ataques puede demorar varios años. La reparación y reconstrucción de establecimientos educativos puede depender, entonces, del trabajo conjunto sostenido y a gran escala con donantes internacionales y ONG para resolver los problemas de financiamiento y capacidad.

Proteger la educación superior

Proteger la educación superior puede implicar algunas medidas similares a las utilizadas en escuelas primarias o secundarias, como recurrir a guardias de seguridad o escoltas en los campus, y reforzar la seguridad de portones, muros, cercas y ventanas. Pero también puede incluir otro tipo de medidas. Los programas de enseñanza a distancia y los sistemas de becas de estudio, enseñanza o investigación en el extranjero, por ejemplo, han permitido que la educación continúe lejos del lugar donde se originan las amenazas. La investigación realizada recientemente por GCPEA, en la cual se abordó la relación entre autonomía y seguridad, concluyó que incrementar la autonomía de las universidades respecto del Estado puede, además, contribuir a reducir el riesgo de ataques, especialmente cuando las universidades contratan sus propios guardias de seguridad, dado que se reduce la probabilidad de enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas del Estado, así como la posibilidad de detenciones arbitrarias por conflictos vinculados con la libertad académica.



El Consejo de Seguridad de la ONU adopta, en forma unánime, la Resolución 1998 (2011), que incluye los ataques contra escuelas y hospitales como un delito que da lugar a la obligación, establecida por la ONU, de supervisión y presentación de informes sobre abusos contra los niños en los conflictos armados.

© 2011 UN Photo/Devra Berkowitz

Incidencia

La presentación de informes y la incidencia por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, ONG y órganos de la ONU han generado mayor conciencia sobre los ataques y han propiciado respuestas y medidas de prevención más efectivas. Los datos obtenidos a través de la supervisión han sido utilizados para presionar a fuerzas militares a fin de que desalojen escuelas que han utilizado con fines militares —por ejemplo, en Afganistán, RDC y Sudán del Sur—, y para obtener fondos destinados a reparar y reabastecer escuelas que sufrieron deterioro. En algunos países, como la India, diversas organizaciones han procurado persuadir al gobierno para que abandone el uso de escuelas como centros de votación y se abstenga de convocar a docentes para el control de las mesas de sufragio durante las elecciones políticas, dado que esto puede agravar su vulnerabilidad a los ataques. Tanto organizaciones de derechos humanos como movimientos sindicales han promovido, a nivel internacional, la liberación de estudiantes y académicos que fueron detenidos arbitrariamente, torturados o encarcelados en países como Colombia, Irán, Sudán y Turquía.

Principales recomendaciones

Atacar escuelas, universidades, estudiantes, docentes y académicos es una táctica habitual en situaciones de conflicto e inseguridad en todo el mundo. Si bien se han logrado algunos avances, es posible y necesario continuar impulsando iniciativas para proteger la educación:

- Los estados deberían investigar, juzgar y, cuando se demuestre su culpabilidad, sancionar a quienes ordenen, tengan responsabilidad como superiores o participen en las distintas violaciones del derecho internacional que constituyen ataques contra la educación. Los tribunales regionales e internacionales deberían, asimismo, considerar en particular las distintas transgresiones que constituyen ataques a la educación.
- Los gobiernos, las Naciones Unidas, las operaciones regionales de mantenimiento de la paz y los grupos armados no pertenecientes al Estado deberían abstenerse de utilizar escuelas y universidades para fines militares. Asimismo, deberían adoptar las Directrices de Lucens para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos armados, y receptarlas en su doctrina y sus políticas.
- Los líderes gubernamentales y de grupos armados no pertenecientes al Estado deberían realizar declaraciones públicas inequívocas en las cuales expresen que los ataques a la educación están prohibidos e impartir órdenes militares claras en este sentido. Los estados deberían, además, asegurar que su derecho interno penalice todos los elementos de los ataques a la educación, en consonancia con lo dispuesto por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
- Los gobiernos de los estados donde se produzcan ataques deberían realizar un seguimiento y una investigación rigurosos de las agresiones contra estudiantes, docentes, académicos y otros miembros del personal educativo, y contra escuelas y universidades, así como también de las consecuencias de tales ataques, para luego aplicar esta información en la coordinación de las respuestas. En el ámbito internacional, los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados de derechos humanos deberían plantear de manera más sistemática el problema de los ataques a la educación y el uso militar de escuelas en su examen de los estados, y los gobiernos y la sociedad civil deberían aportar mayor información sobre estos abusos en las presentaciones que efectúen.
- Cuando los riesgos de seguridad lo ameriten, los órganos de la ONU, las ONG, las fuerzas de mantenimiento de la paz y los gobiernos deberían iniciar o participar en negociaciones con las partes de un conflicto, a fin de acordar que se respeten las escuelas como espacios seguros y que se proceda a la reapertura de escuelas que estén cerradas.
- Los gobiernos deberían asegurar que ningún establecimiento educativo —como así tampoco su personal ni sus estudiantes— sea destinado a eventos electorales y políticos, cuando exista una posibilidad razonable de que este uso agrave el riesgo de ataques.
- Los ministerios de educación deberían adoptar programas de estudio y políticas sobre dotación de personal que prevean la posibilidad de conflictos, para asegurar que la educación no contribuya a propiciar conflictos y se convierta en objeto de ataques.
- Los estados deberían proteger las instituciones de educación superior en todo momento y prevenir los actos de violencia e intimidación contra académicos, adoptando e implementando para ello políticas, reglamentaciones y leyes que promuevan tanto la autonomía institucional como la seguridad de las comunidades de educación superior.

Global Coalition to Protect Education from Attack

Secretaría

350 5th Avenue, 34th Floor, Nueva York, Nueva York 10118-3299

Teléfono: 1.212.377.9446 • Correo electrónico: GCPEA@protectingeducation.org



www.protectingeducation.org

